



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
29 de octubre de 2024
Español
Original: francés

Comité de los Derechos del Niño

Decisión adoptada por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, respecto de la comunicación núm. 135/2021* **

<i>Comunicación presentada por:</i>	N. P. (representada por abogados)
<i>Presuntas víctimas:</i>	J. P. M. y M. P. M.
<i>Estado parte:</i>	Francia
<i>Fecha de la comunicación:</i>	12 de diciembre de 2020 (presentación inicial)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	2 de septiembre de 2024
<i>Asunto:</i>	Internamiento de las hermanas en una institución a fin de garantizar su derecho a la salud y la educación
<i>Cuestión de procedimiento:</i>	Consentimiento del niño
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Interés superior del niño; separación de las niñas respecto de su madre (internamiento en institución); derecho del niño a ser escuchado; derecho a la educación; derecho a la salud; derecho a la seguridad
<i>Artículos de la Convención:</i>	3, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 28 y 34 a 37
<i>Artículo del Protocolo Facultativo:</i>	5, párr. 2

1.1 La autora de la comunicación es N. P., de nacionalidad francesa, que declara actuar en nombre de sus dos hijas J. P. M. y M. P. M., de nacionalidad francesa, nacidas el 20 de mayo de 2008 y el 30 de julio de 2009, respectivamente. Alega que el Estado parte vulnera los derechos que amparan a sus hijas en virtud de los artículos 3, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 28 y 34 a 37 de la Convención. Como medidas provisionales, solicita que le devuelvan a sus hijas mientras dure el examen de la comunicación y que el Estado parte pida a profesionales médicos independientes que lleven a cabo el diagnóstico de su hija. La autora

* Adoptada por el Comité en su 97º período de sesiones (26 de agosto a 13 de septiembre de 2024).

** Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Suzanne Aho, Aïssatou Alassane Moulaye Sidikou, Thuwayba Al Barwani, Hynd Ayoubi Idrissi, Mary Beloff, Rinchen Chopel, Rosaria Correa, Bragi Gudbrandsson, Philip Jaffé, Sopio Kiladze, Benyam Dawit Mezmur, Otani Mikiko, Luis Ernesto Pedernera Reyna, Ann Skelton, Velina Todorova, Benoit Van Keirsbilck y Ratou Zara.



afirma estar representada por Edwige Garcia y Frédéric Fabre¹. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 7 de abril de 2016.

1.2 El 4 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 6 del Protocolo Facultativo, el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones, actuando en nombre del Comité, decidió no solicitar la adopción de medidas provisionales de conformidad con el artículo 6 del Protocolo Facultativo y el artículo 7 de su reglamento en relación con el Protocolo Facultativo.

Hechos expuestos por la autora

2.1 La autora mantuvo una relación con M. M., el padre de sus dos hijas, quien abandonó el domicilio familiar en 2009 para mudarse a otra parte del país. En virtud de una decisión del juez de familia, M. M. solía recibir en su domicilio a sus hijas durante las vacaciones escolares. Desde 2012, la autora convive con E. G., que reside en el mismo domicilio con las dos niñas. Desde entonces, la autora ha tenido dificultades con J. P. M., que tenía “rabieta” en las que solo la madre y su pareja podían calmar a la niña, que además tenía problemas de encopresis.

2.2 El 12 de junio de 2017, el jefe del servicio de pediatría del hospital de Saint-Brieuc —que había atendido a J. P. M. cuando estuvo hospitalizada por las violentas rabietas que padecía— elaboró un informe acerca de J. P. M., en el que mencionaba sus crisis y que se sentía ignorada por su madre. Además, dos psicólogos dieron parte de la situación de J. P. M. después de que su madre le hablara de manera violenta. Mediante solicitud de fecha 3 de noviembre de 2017, la Fiscalía remitió la situación de las dos niñas al juez de menores. En el certificado médico de fecha 7 de noviembre de 2017, se caracterizó a la autora como muy dañina y se indicó que presentaba un trastorno grave de la personalidad, por lo que se recomendó una medida de internamiento provisional.

2.3 El 17 de noviembre de 2017, la jueza de menores del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Brieuc ordenó que se enviara a las dos niñas a hogares diferentes². La jueza señaló que, ya que el Centro Médico y Psicológico para Niños y Adolescentes no había detectado ningún problema, J. P. M. había sido tratada por un psicólogo privado. Los trabajadores sociales que participaron en la evaluación social habían observado los arrebatos de ira de J. P. M., que parecían estar relacionados con las diferentes actitudes de la madre hacia su hija. La evaluación psicológica concluyó que existía un vínculo destructivo entre madre e hija y que era necesario sacar a J. P. M. del domicilio familiar. Según la descripción de la escuela, J. P. M. era una alumna agradable y no presentaba ninguna dificultad de comportamiento. Los profesionales que conocieron a J. P. M. se mostraron preocupados por la situación de M. P. M., que parecía estar atrapada en un conflicto de lealtades hacia su madre. La jueza también observó un enfrentamiento considerable entre la autora y su propia madre.

2.4 En la misma decisión, la jueza constató que la autora mostraba gran inquietud por la situación de J. P. M. y aparentaba estar sobrepasada; por lo tanto, parecía necesitar ayuda y se hacía cargo de la necesidad de distanciarse de la niña; sin embargo, según la madre, la finalidad de esta medida no era proteger a la niña³, sino protegerlos a todos del comportamiento de J. P. M. La jueza dictaminó que el hecho de que J. P. M. y M. P. M. estuvieran al cuidado de su madre en el domicilio de esta no favorecía un desarrollo psicoafectivo armonioso de las niñas y constituía una situación de peligro para ellas. La jueza concluyó que, para que las dos niñas pudieran rehacer su vida lejos del domicilio materno y para que la madre pudiera someterse a terapia, era conveniente ordenar el internamiento de las niñas durante un período de seis meses en el servicio de Ayuda Social a la Infancia del

¹ Sin embargo, es la propia autora quien envía y firma la comunicación.

² El 14 de marzo de 2019, el Tribunal Correccional de Saint-Brieuc declaró a la autora culpable de difamación de un tribunal y una autoridad pública tras haber distribuido octavillas en las que denunciaba la sentencia de 17 de noviembre de 2017 y las condiciones en los hogares de acogida, alegando que sus hijas fueron “utilizadas como objetos sexuales”. La decisión fue confirmada en apelación.

³ La autora se oponía a que se internase a M. P. M.

departamento de Côtes d'Armor. La jueza también ordenó un examen psiquiátrico de ambos progenitores.

2.5 Mediante la orden judicial de 8 de marzo de 2018, se suspendieron los derechos de visita y de comunicación telefónica de la autora respecto de J. P. M., pero se mantuvo el derecho a la correspondencia escrita. La jueza señaló que J. P. M. había pedido mantener comunicación únicamente por escrito con su madre, cuya actitud vengativa hacia los educadores ponía a las dos niñas en una situación delicada y generaba mucho estrés. En cuanto a M. P. M., no pidió encontrarse con su madre con más frecuencia.

2.6 El 14 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelación de Rennes desestimó el recurso que había presentado la autora contra la decisión de 17 de noviembre de 2017 y la orden de 8 de marzo de 2018. El tribunal observó que la autora había impugnado los informes sobre la situación de sus hijas sin aportar ninguna prueba. Dictaminó que el mero hecho de que la autora solo hubiera enviado a su hija a un médico generalista, a pesar de que J. P. M. sufría “crisis” violentas desde 2012, y no hubiera consultado a un especialista para entender su comportamiento y tratar de proporcionarle el seguimiento adecuado para los problemas que la aquejaban, planteaba dudas sobre su actitud como madre. Esta falta de atención, que ella justificó alegando que era difícil obtener cita con un especialista, comprometió seriamente el desarrollo psicoafectivo tanto de J. P. M. como de M. P. M., que fue testigo de la violencia que manifestaba su hermana durante sus “crisis”. El tribunal también observó que, desde el internamiento, la autora había estado buscando el más mínimo fallo en el funcionamiento del servicio, y esto impedía que se realizara ninguna labor educativa. El comportamiento inapropiado de la autora hacia sus hijas, que había dado lugar al internamiento, seguía vigente. Por consiguiente, el tribunal confirmó el internamiento a falta de otra solución, habida cuenta de que el estado de salud del padre y la distancia geográfica le impedían hacerse cargo de las menores.

2.7 El 16 de mayo de 2018, tras haber entrevistado a las niñas⁴, la jueza de menores de Saint-Brieuc renovó su internamiento en el servicio de Ayuda Social a la Infancia por un período de un año, con derecho de visita supervisada para M. P. M., pero suspendió el acceso a J. P. M. La jueza constató, por un lado, la evolución positiva del desarrollo de las niñas en las instituciones de acogida y, por otro, que la autora, a través de su discurso vengativo y su dificultad para hablar de sí misma, de sus hijas y de la relación que mantenía con cada una de ellas, por miedo a ser juzgada, se había privado de toda oportunidad de cuestionar sus actos y no había permitido que la situación evolucionara. La jueza consideró que esta postura seguía poniendo a J. P. M., que era objeto de un discurso tendente a la inseguridad, y a M. P. M., que era incapaz de distanciarse, en una situación de riesgo con respecto a su desarrollo psicológico. La jueza tuvo en cuenta un informe psiquiátrico sobre la autora, presentado el 26 de abril de 2018, en el que no se apreciaba ninguna patología o trastorno psiquiátrico, y se afirmaba que no padecía un trastorno persecutorio. El perito psiquiatra había subrayado que la autora disponía de competencias y experiencia suficientes para ocuparse satisfactoriamente de la educación de sus hijas y que tenía buenas aptitudes psicopedagógicas para garantizar el desarrollo emocional satisfactorio de sus hijas. Sin embargo, observó un cierto distanciamiento, ya que la autora hablaba poco de sus hijas. Mediante un escrito presentado el 24 de mayo de 2018, la autora recurrió la decisión de internamiento. Mediante la orden de 4 de diciembre de 2018, el Tribunal de Apelación de Rennes desestimó la solicitud de la autora de que se suspendiera la ejecución provisional de la sentencia de 16 de mayo de 2018.

2.8 Durante el verano de 2018, se reunió a las dos niñas en el mismo centro de acogida. A raíz de las acusaciones de agresión sexual formuladas por J. P. M. contra un menor del centro donde estuvo acogida anteriormente, se presentó una denuncia que se está investigando actualmente.

2.9 A continuación, según las órdenes dictadas los días 23 y 25 de julio, 30 de agosto, y 12 y 19 de noviembre de 2018, el juez de menores de Saint-Brieuc suspendió el derecho de

⁴ J. P. M. expresó su deseo de seguir internada, mientras que M. P. M. manifestó que deseaba volver al domicilio de su madre.

visita de la autora con respecto a M. P. M.⁵, suspendió el derecho a las llamadas telefónicas⁶, pero mantuvo el derecho a la correspondencia, cuyo contenido controlaba el servicio de tutela; autorizó a la Ayuda Social a la Infancia a matricular a las niñas en la escuela y a suscribir la cobertura universal de los riesgos de enfermedad, bajo patria potestad; concedió a la abuela materna los derechos de visita y alojamiento de J. P. M. y M. P. M.; transfirió a la Ayuda Social a la Infancia la patria potestad respecto de J. P. M. el fin de semana del 7 al 9 de diciembre de 2018, y concedió al padre de las niñas derechos de visita y alojamiento durante las vacaciones escolares.

2.10 El 29 de abril de 2019, tras pronunciarse sobre el recurso que había interpuesto la autora contra la resolución de 16 de mayo de 2018 y contra las órdenes posteriores, el Tribunal de Apelación de Rennes confirmó la renovación del internamiento de J. P. M. y la suspensión del derecho de visita de la autora, pero ordenó el cese del internamiento de M. P. M., para quien se encomendó a la Ayuda Social a la Infancia una medida de asistencia educativa reforzada de régimen abierto. El tribunal observó que el informe psiquiátrico presentado el 26 de abril de 2018 se basaba únicamente en las declaraciones de la autora, pero no se había examinado a las niñas, lo que hacía que las conclusiones periciales fueran frágiles. El tribunal observó que, desde que estaba internada, M. P. M. había desarrollado un malestar cuyo origen podía estar relacionado con el internamiento. Además, el internamiento no había servido para que se acercase a su hermana, sino que más bien intentaba distanciarse de ella. Sin embargo, en la resolución no se mencionaban las alegaciones de violación de J. P. M. y de malos tratos físicos de M. P. M. A raíz de la decisión de 2 de mayo de 2019, el juez de menores de Rennes, a quien correspondía ocuparse del caso, confió provisionalmente a M. P. M. a la Ayuda Social a la Infancia hasta el 16 de mayo de 2019 y suspendió el derecho de visita de la autora con respecto a M. P. M.

2.11 El 18 de abril de 2019, la madre de la autora presentó una denuncia penal por agresión contra la autora y su pareja. Las niñas quedaron tan traumatizadas por los actos de violencia contra su abuela materna cometidos en su presencia que manifestaron al servicio de acogida que no querían regresar al domicilio materno, y mencionaron también los malos tratos infligidos por la pareja de la autora cuando vivían allí.

2.12 En su sentencia ejecutoria de 16 de mayo de 2019, el juez de menores de Rennes renovó hasta el 16 de mayo de 2020 el internamiento de las niñas en el servicio de Ayuda Social a la Infancia, ordenó mantener en secreto el lugar de internamiento, suspendió el derecho de visita de la madre, estableció el derecho de visita y de alojamiento del padre y de la abuela materna, e invitó al servicio de tutela a solicitar al juez de familia la delegación de la patria potestad que ostentaba la madre. El juez tomó esta decisión basándose en un parte de incidentes de fecha 18 de abril de 2019, según el cual se produjeron actos violentos en la estación de Rennes, cuando las niñas regresaban de casa de su padre: la pareja de la autora vejó a la abuela materna e hizo que la cabeza de M. P. M. golpeará contra el ascensor cuando intentaba llevársela por la fuerza. Desde este incidente, M. P. M. contó por primera vez a los trabajadores sociales la violencia que había sufrido en casa de su madre. La autora interpuso un recurso, pero el 24 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelación de Rennes confirmó la sentencia de 16 de mayo de 2019.

2.13 Mediante su orden de 16 de mayo de 2019, el Tribunal de Apelación de Rennes ordenó un examen psiquiátrico de la autora y de sus dos hijas, y designó un perito a tal efecto.

2.14 Mediante sucesivas órdenes de fecha 24 de mayo, 5 de julio y 23 de agosto de 2019, el juez de menores de Rennes autorizó a la Ayuda Social a la Infancia a concertar citas para el tratamiento de ortodoncia de M. P. M.; recordó a la Ayuda Social a la Infancia que el padre podía autorizar un acto, ya que la patria potestad era conjunta; invitó de nuevo a la Ayuda Social a la Infancia a remitir rápidamente el asunto al juez de menores para solicitar una delegación de la patria potestad; autorizó a la Ayuda Social a la Infancia a matricular a las dos niñas en un centro escolar para el curso 2019/20, así como en las actividades de ocio y de verano que eligiera el servicio de tutela; ordenó mantener en secreto los lugares de

⁵ El motivo esgrimido era que la autora y su pareja hacían que M. P. M. se involucrara tanto en el conflicto que mantenían con los servicios sociales que el derecho de visita no favorecía a la niña.

⁶ Para evitar que se dirigiera a M. P. M. de forma poco adecuada.

vacaciones, ocio y centros escolares de J. P. M. y M. P. M.; autorizó de nuevo la matriculación de las dos niñas para el curso 2019/20 en el centro escolar que eligiera el servicio de tutela, y ordenó una vez más mantener en secreto los lugares de ocio y vacaciones de verano, elegidos por el servicio de tutela.

2.15 Según un informe psiquiátrico de fecha 26 de febrero de 2020, la autora no presentaba ningún síntoma de trastorno tímico o psicótico, no tenía ningún trastorno de la personalidad y no representaba ningún peligro para sí misma ni para los demás.

2.16 Con arreglo a la orden de 16 de mayo de 2019, el 21 de mayo de 2020 se realizó un examen psiquiátrico a la autora y a sus hijas por vídeo debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). J. P. M. declaró que había sido agredida sexualmente en el primer centro de acogida, donde un chico realizó tocamientos en la zona genital y las nalgas a través de la ropa.

2.17 Mediante solicitud de fecha 9 de marzo de 2020, la autora pidió el traslado de sus hijas a su domicilio por motivo de la pandemia de COVID-19. En su informe presentado el 14 de abril de 2020, la Ayuda Social a la Infancia solicitó que se renovara el internamiento en el propio servicio. En su sentencia de 17 de junio de 2020, el juez de menores del Tribunal de Primera Instancia de Rennes condenó a la autora a pagar una multa civil de 3.000 euros, ya que sus solicitudes de que se admitiera la inscripción en falsedad de una decisión confirmada por el Tribunal de Apelación y de los informes de los trabajadores sociales eran de carácter dilatorio; renovó el internamiento de las niñas en la Ayuda Social a la Infancia hasta el 17 de junio de 2021, ordenó que se mantuviera en secreto el lugar donde se acogía a las niñas, concedió a la autora el derecho de visita supervisada, de cuya aplicación se encargaría el servicio de tutela; concedió al padre derechos de visita y alojamiento, de cuya aplicación se encargaría el servicio de tutela en presencia de un tercero; concedió a la abuela materna el derecho de visita y alojamiento, de cuya aplicación se encargaría el servicio de tutela; y ordenó la ejecución provisional de la sentencia. En el momento de presentar esta comunicación, seguía pendiente el recurso contra la sentencia.

2.18 En una decisión de fecha 13 de agosto de 2020, el Presidente del Tribunal de Apelación de Rennes suspendió la ejecución provisional de la sentencia dictada por el juez de menores porque establecía un derecho de visita supervisada en favor de la autora sin fijar la frecuencia.

2.19 Mediante la orden de acción educativa de fecha 1 de septiembre de 2020, el juez de menores de Rennes autorizó a la Ayuda Social a la Infancia a iniciar los trámites para matricular a J. P. M. en secundaria para el curso 2020/21.

Denuncia

3.1 La autora afirma que se han vulnerado los derechos que asisten a sus hijas en virtud de los artículos 3, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 28 y 34 a 37 de la Convención. Sostiene asimismo que se han vulnerado los artículos 3, 8, 13 y 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), los artículos 7, 14, 16, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 y 10 a 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

3.2 La autora sostiene que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención porque J. P. M. sigue teniendo crisis, pese a que lleva más de tres años separada de su madre, no ha recibido atención médica y todavía sigue sin tener un diagnóstico, ya que los sucesivos jueces han hecho caso omiso de las solicitudes de examen médico por parte de profesionales independientes especializados en diagnósticos de autismo. M. P. M., por su parte, sufrió durante varios meses de un uñero infectado por falta de cuidados, y parece que no se está tratando seriamente la depresión inherente al trauma del internamiento arbitrario sufrido, ya que ha tratado muchas veces de acabar con su vida.

3.3 La autora sostiene que el internamiento de las niñas y el haberlas separado quebrantando “la protección del vínculo entre hermanas” no responden al interés superior del niño, y vulneran sus derechos en virtud de los artículos 3, 23, 35, 36 y 37 de la Convención. Según la autora, mantener a sus hijas en régimen de internamiento constituye un trato

inhumano y degradante en el sentido del artículo 37 de la Convención y una privación del derecho a conocer a la propia familia en el sentido del artículo 8 de la Convención. Además, la autora alega que el internamiento de M. P. M. la llevó a un estado de depresión, con pensamientos suicidas, en violación del artículo 24 de la Convención.

3.4 A continuación, la autora se remite al artículo 34 de la Convención y afirma que J. P. M. fue víctima de varias violaciones mientras estuvo internada en el establecimiento de la Ayuda Social a la Infancia y que, desde los 11 años, la niña es muy activa en las plataformas de medios sociales, pese a que están prohibidas a los menores de 13 años. La autora afirma que J. P. M. se exhibe en esas redes para prostituirse, y que la responsabilidad recae plenamente en la Ayuda Social a la Infancia.

3.5 La autora invoca el artículo 20 de la Convención, relativo a la obligación de garantizar una protección especial a los niños privados de su medio familiar, para denunciar el trato inhumano y degradante al que fueron sometidas las niñas en las estructuras de la Ayuda Social a la Infancia.

3.6 La autora invoca a continuación el artículo 28 de la Convención para quejarse de que los distintos jueces de menores habían denegado en varias ocasiones el permiso para matricular a las niñas en un colegio católico, a pesar de que M. P. M. no estaba matriculada en ningún centro al inicio del curso escolar 2020/21.

3.7 La autora invoca los artículos 35 y 36 de la Convención y afirma que son los consejos departamentales los que organizan la trata de niños franceses “con la complicidad de los jueces”.

3.8 Por último, la autora denuncia el sistema de internamiento del Estado parte basándose en varios informes, destacando el interés económico que entraña ese sistema, ya que el presupuesto por cada niño acogido es de 189 euros al día.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

Aclaraciones sobre los hechos

4.1 En sus observaciones de 18 de octubre de 2021, el Estado parte sostiene que las decisiones de colocar a J. P. M. y M. P. M. en hogares separados se tomaron teniendo en cuenta el interés superior de las niñas.

4.2 Sobre la base del informe del servicio de Ayuda Social a la Infancia de 2 de noviembre de 2017, el 17 de noviembre de 2017, un juez decidió enviar a J. P. M. y M. P. M. a hogares separados por un período de 6 meses. En su sentencia de 14 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelación de Rennes confirmó el internamiento; y el 16 de mayo de 2018, el juez lo renovó por un período de 12 meses.

4.3 El 29 de abril de 2019, el Tribunal de Apelación de Rennes confirmó la orden de internamiento respecto de J. P. M., al tiempo que puso fin al internamiento de M. P. M. Sin embargo, M. P. M. se negó a volver a casa de su madre, por lo que el 2 de mayo de 2019 el juez dictó una orden de internamiento provisional⁷.

Observaciones sobre la admisibilidad

4.4 En primer lugar, el Estado parte señala que hay varios procedimientos judiciales pendientes ante el Tribunal de Menores de Rennes y el Tribunal de Apelación de Rennes. En particular, la autora no ha presentado un recurso de casación para impugnar las sentencias de 17 de junio de 2020 y 30 de noviembre de 2020⁸. Al no haber interpuesto un recurso de casación, en particular contra la sentencia de 30 de noviembre de 2020, la autora, a juicio del Estado parte, dejó pasar la oportunidad de exponer su caso y de que el tribunal revisara el internamiento de sus hijas. Por lo tanto, remitiéndose al artículo 7 e) del Protocolo

⁷ La sentencia de 16 de mayo de 2019 confirmó la continuidad del internamiento de M. P. M. y la prórroga de 12 meses del internamiento de J. P. M. La decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelación el 24 de febrero de 2020.

⁸ El juez renovó el internamiento por otros 12 meses mediante una orden de fecha 17 de junio de 2020, confirmada por el Tribunal de Apelación de Rennes el 30 de noviembre de 2020.

Facultativo, el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisibles porque la autora no ha agotado las vías de recurso internas.

4.5 En segundo lugar, invocando el artículo 1 del Protocolo Facultativo, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisibles por “falta manifiesta de fundamentación y porque no se han expuesto suficientemente los motivos de la comunicación”. Según el Estado parte, las alegaciones de violación formuladas por la autora son de carácter general y a veces contradictorias o no guardan relación con el caso⁹.

4.6 En tercer lugar, el Estado parte señala que la autora no planteó sus quejas directamente ni en cuanto al fondo en los recursos que interpuso ante los tribunales nacionales. El Estado parte considera que esto constituye otro motivo de inadmisibilidad, y se remite a decisiones anteriores del Comité de Derechos Humanos en el sentido de que deben alegarse al menos las cuestiones de fondo durante los procedimientos internos para que el tribunal pueda remediar la vulneración¹⁰.

Observaciones sobre el fondo

4.7 El Estado parte sostiene que la autora alega de manera incoherente que se han vulnerado los artículos 3, 8, 16, 19, 20, 24, 28 y 34 a 37 de la Convención cuando, en contra de lo que afirma la autora, el interés superior de J. P. M. y M. P. M. fue el criterio primordial que guió todas las decisiones del juez de menores.

4.8 Por lo que respecta a la decisión de que la Ayuda Social a la Infancia se hiciera cargo de J. P. M. y M. P. M. y a la afirmación de la autora de que se la privó de la posibilidad de visitar a sus hijas “sin motivo válido”, el Estado parte sostiene que, cuando se tomó la decisión de internar a J. P. M. y M. P. M., los tribunales nacionales actuaron únicamente después de haber analizado a fondo la información pertinente. El 2 de noviembre de 2017, la unidad de recopilación de datos preocupantes del departamento de Côtes-d’Armor remitió a la Fiscalía un informe en el que advertía de la relación perjudicial entre la autora y J. P. M., y afirmaba que la autora descalificaba, humillaba y desatendía a J. P. M., por lo que era necesario que la niña se distanciase del domicilio familiar. Esta información fue confirmada posteriormente por profesionales del centro médico y psicológico. El caso se remitió al Tribunal Correccional de Saint-Brieuc. El 17 de noviembre de 2017, tras un análisis en profundidad y una audiencia a la que asistieron las niñas entre un representante de la oficina de asistencia social y la autora, asistida por un abogado, el juez de menores puso a J. P. M. y M. P. M. a cargo de la Ayuda Social a la Infancia por considerar que el domicilio de la madre no favorecía “su desarrollo psicoafectivo armonioso” y suponía “una situación de peligro para las dos niñas”. No obstante, el juez dispuso visitas supervisadas para preservar la relación entre la autora y sus hijas. El Estado parte considera que esta medida demuestra la voluntad del juez de menores de tomar decisiones en el interés superior de J. P. M. y M. P. M. y que, habida cuenta del peligro, el internamiento fuera del hogar estaba justificado y era proporcionado.

4.9 En respuesta a las alegaciones de la autora según las cuales el haber separado a las niñas vulneraba “la protección del vínculo entre hermanas que tanto defiende la Convención sobre los Derechos del Niño”, el Estado parte señala que la evaluación psicológica de 2 de noviembre de 2017 indicó que la autora había fomentado la rivalidad entre sus dos hijas.

4.10 El Estado parte se opone a la afirmación de la autora de que el derecho de visita se suprimió posteriormente sin motivo alguno, y sostiene en cambio que el derecho de visitar a J. P. M. no se suprimió hasta después de que el juez de menores recibiera un informe sobre un incidente en el que se afirmaba que la autora se comportaba de manera inapropiada con sus hijas, lo que causaba un gran sufrimiento. El juez de menores suspendió el derecho de visita a J. P. M. pero mantuvo el derecho a realizar llamadas telefónicas y a mantener correspondencia.

⁹ A modo de ejemplo, el Estado parte señala que la autora alega que existe una red nacional de prostitución orquestada por la Ayuda Social a la Infancia que organiza la trata de menores de edad, y que las vacunas son nocivas y responden al interés de la industria farmacéutica.

¹⁰ Véase, por ejemplo, *Stephens c. Jamaica* (CCPR/C/55/D/373/1989), y *Singh c. Francia*, comunicación núm. 1852/2008.

4.11 Sobre la base de un informe relativo a una medida judicial de investigación educativa que abarcó de septiembre de 2017 a febrero de 2018, el Tribunal de Apelación de Rennes confirmó la sentencia por la que se suspendió el derecho de visita. El tribunal observó que la autora se oponía sistemáticamente al internamiento y utilizaba las visitas supervisadas para impugnarlo, más que para acercarse a sus hijas. El estrés causado a las niñas suscitaba serias preocupaciones por su desarrollo psicoafectivo. El 16 de mayo de 2018, el juez renovó la orden de internamiento por un período de 12 meses. Aunque la autora siempre ha cuestionado las órdenes de internamiento, el Estado parte subraya que el juez encontró suficientes elementos de peligro para justificar la continuación del internamiento. Asimismo, el juez tomó nota de los deseos que expresó J. P. M. de continuar internada y de seguir teniendo la posibilidad de ver a su madre de vez en cuando. Posteriormente, el juez suspendió los derechos de visita y de contacto telefónico respecto de M. P. M., señalando que la presencia de la autora podría perturbar a la niña. El tribunal indicó, en particular, que la autora intentaba convencer a M. P. M. de que corría peligro mientras estaba internada y hacía comentarios inapropiados y sugerentes de carácter sexual. Se mantuvo el derecho a la correspondencia escrita.

4.12 El Estado parte indica que, aunque la autora era firme partidaria de que sus hijas recibieran una educación religiosa en un colegio católico, el padre respaldó la decisión del tribunal de matricularlas en un centro público. Tras un cuidadoso examen, el tribunal dictaminó que las niñas podían recibir una educación religiosa independientemente de la escuela a la que asistieran. También señaló que la objeción de la autora era “manifiestamente injustificada y abusiva”. El tribunal señaló además que la autora había obstaculizado deliberadamente el acceso de las niñas a la atención médica al insistir en que consultaran a profesionales de la salud que se encontraban a gran distancia y al no sufragar los gastos incurridos, que finalmente le fueron reembolsados.

4.13 En abril de 2019, el tribunal confirmó su decisión de prorrogar el internamiento de J. P. M., y la justificó aludiendo a que la autora no mejoraba y, por tanto, persistía la inquietud por el desarrollo psicoafectivo de J. P. M. Por otro lado, el tribunal llegó a la conclusión de que se atendía al interés superior de M. P. M. poniendo fin a su internamiento y proporcionándole un entorno de recursos reforzados. Pese a que se suspendió la orden de internamiento, M. P. M. expresó su deseo de no volver a vivir con la autora.

4.14 Al parecer, el 17 de abril de 2019, la abuela materna fue agredida violentamente por la autora en presencia de las dos niñas. Tras celebrar una audiencia, el juez colocó de nuevo a las niñas a cargo de la Ayuda Social a la Infancia por un período de 12 meses, mantuvo en secreto el domicilio y suspendió los derechos de visita de la autora. Por lo que respecta al incidente violento, la autora y su pareja fueron acusados y puestos bajo control judicial, y se les prohibió entrar en contacto con las niñas, pero la Sala de Recursos contra la Instrucción del Tribunal de Apelación de Rennes levantó la prohibición de contacto el 26 de junio de 2020.

4.15 El 24 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelación de Rennes confirmó la orden de internamiento, señalando que las dos niñas habían expresado que, aunque echaban de menos a la autora, temían el contacto directo con ella dada la violencia física y psicológica a la que se habían enfrentado mientras vivían con ella y que estaban más tranquilas en el internamiento.

4.16 El Estado parte sostiene que el interés superior de J. P. M. y M. P. M. fue el motivo por el que el juez renovó la orden de internamiento el 17 de junio de 2020 y, el 5 de octubre de 2020, fijó las condiciones para las visitas supervisadas de la autora. Esta decisión fue confirmada el 30 de noviembre de 2020 por el Tribunal de Apelación de Rennes, que señaló que para que la autora y sus hijas pudieran forjar un vínculo duradero, la autora debía tomar medidas para que no se reprodujeran las disfunciones. El razonamiento del tribunal se basó en informes psiquiátricos que indicaban que la autora tenía “rasgos de personalidad paranoide” y que el vínculo con sus hijas debía restablecerse gradualmente y bajo supervisión. El tribunal examinó los derechos de visita y, dado su carácter esencial, los amplió a dos horas por hija y por visita.

4.17 En respuesta a la afirmación de la autora según la cual mantener el internamiento constituía un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 37 de la Convención y la

privación del derecho a conocer a la propia familia en el sentido del artículo 8 de la Convención, el Estado parte sostiene que los tribunales nacionales han dado prioridad al interés superior de las niñas, respetando su deseo de suspender las visitas y posteriormente restablecerlas.

4.18 De conformidad con los artículos 19 y 24 de la Convención, el Estado parte recuerda que, en todas las decisiones, los tribunales han salvaguardado el bienestar, la salud y la seguridad de las niñas. Además, el Estado parte reafirma que los tribunales han revisado periódicamente la orden de internamiento, basando sus decisiones en información objetiva y en audiencias de todas las partes interesadas. Por consiguiente, el Estado parte concluye que no se han violado los artículos 8, 19, 24 y 37 de la Convención.

4.19 La autora considera que se han violado los artículos 34, 35 y 36 de la Convención y alega que, dado que J. P. M. había sido agredida sexualmente por un menor mientras estaba internada, la Ayuda Social a la Infancia había orquestado su prostitución. El Estado parte recuerda que esas alegaciones fueron remitidas al tribunal de menores. La autora realizó esas alegaciones sin aportar pruebas y, entre el 2 de julio y el 20 de septiembre de 2018, distribuyó octavillas en las que denunciaba que la Ayuda Social a la Infancia maltrataba a los niños. El 14 de marzo de 2019, el Tribunal Correccional de Saint-Brieuc condenó a la autora por difamar a esta institución distribuyendo octavillas en las que criticaba las condiciones de vida en el centro de acogida.

4.20 En cuanto al internamiento, la autora sostiene que la medida era arbitraria, provocaba depresión y fracaso escolar, y conducía a la delincuencia, la prostitución y el tráfico de drogas, en contravención de los artículos 35 y 36 de la Convención. En cambio, el Estado parte sostiene que se llevó a cabo respetando plenamente los artículos 3 y 9 de la Convención y que era una medida necesaria para proteger la seguridad física y psicológica de las niñas.

4.21 Cada vez que los tribunales han tomado la decisión de internar a las niñas en un centro de la Ayuda Social a la Infancia, han procurado salvaguardar su interés superior. Si bien consideraba necesario proteger la salud y el bienestar de las niñas, el tribunal también trató de mantener los lazos familiares con la autora, el padre y la abuela materna. El Estado parte señala además que el padre nunca ha impugnado las decisiones de internamiento del tribunal y que ha podido trabajar de forma positiva la relación con sus hijas ejerciendo su derecho de visita de conformidad con el artículo 5 de la Convención. El Estado parte también desea subrayar que las decisiones relativas al internamiento y al derecho de visita no constituyen un secuestro ni una desaparición forzada, como afirma la autora.

4.22 El Estado parte afirma que las decisiones nacionales se justificaron mediante los informes en que se detallaban las dificultades que encontraba la autora, sobre todo durante las visitas supervisadas, que en última instancia condujeron a la suspensión del derecho de visita. En particular, se consideró que el comportamiento de la autora entrañaba tales dificultades para las niñas que justificaba que se mantuviera en secreto el lugar donde residían y la escuela a la que asistían. En estas circunstancias, el Estado parte sostiene que la responsabilidad de que resultara difícil preservar la relación entre madre e hijas no incumbe a las autoridades nacionales.

4.23 El Estado parte admite que se ha producido una mejora desde que se reanudaron las visitas supervisadas. No obstante, sostiene que la autora no se daba cuenta de las consecuencias perjudiciales de sus actos, que fueron determinantes para que el tribunal decidiera colocar a sus hijas en una familia de acogida y suspender temporalmente el derecho de visita. Los tribunales nacionales afirman haber sopesado juiciosamente el interés superior de las niñas y la preservación de los lazos familiares, adoptando todas las medidas necesarias para promover el bienestar de las niñas. Por consiguiente, el Estado parte declara con firmeza que no se han violado los artículos 3, 5, 9, 34, 35 y 36 de la Convención.

Comentarios de la autora acerca de las observaciones del Estado parte

Aclaración de los hechos

5.1 En sus comentarios de fecha 22 de diciembre de 2021, la autora afirma que durante los primeros meses que estuvo internada J. P. M., quien entonces tenía 9 años, fue objeto de múltiples agresiones sexuales mientras estaba al cuidado de la Ayuda Social a la Infancia. La

autora sostiene que fue procesada y condenada injustamente por haber denunciado públicamente estas agresiones sexuales.

5.2 El 12 de diciembre de 2020, la autora presentó al Comité su comunicación relativa al internamiento de sus hijas, e indicó que, pese a que había solicitado atención médica en numerosas ocasiones, los servicios de protección de la infancia habían desatendido a M. P. M., cuyos problemas de espalda y dentales no habían sido tratados.

Comentarios sobre la admisibilidad

5.3 En respuesta al argumento del Estado parte de que no se habían agotado los recursos internos, la autora reitera que intentó agotarlos. Según ella, el recurso pendiente ante el Tribunal de Casación iba prolongarse en exceso y probablemente no daría lugar a una reparación efectiva.

5.4 Para respaldar la idea de que el recurso sería ineficaz, la autora señala que el 29 de abril de 2019, el Tribunal de Apelación de Rennes anuló el internamiento de M. P. M. y ordenó su “puesta en libertad”. A pesar de esta sentencia, la Ayuda Social a la Infancia se opuso a esta “liberación” y remitió el asunto a la Fiscalía de Saint-Brieuc, que procesó a la autora y su expareja por presuntos actos de violencia. La autora señala que las niñas han estado a cargo de la Ayuda Social a la Infancia durante tres años sin que se haya formulado ninguna acusación al respecto.

5.5 En respuesta a la afirmación del Estado parte según la cual el internamiento de M. P. M. se prorrogó porque ella había expresado su deseo de permanecer al cuidado de la Ayuda Social a la Infancia, la autora sostiene que la niña no mencionó ese deseo y que el internamiento se reafirmó debido a la presunta violencia de su expareja. La autora señala que hasta el año en que se envió la comunicación al Comité, J. P. M. y M. P. M. no habían manifestado supuestamente que no quisieran volver a vivir con ella. La autora observa con desconfianza que las niñas presentaron al juez unas cartas significativamente similares a pesar de haber estado internadas por separado. En opinión de la autora, el incumplimiento de la orden de puesta en libertad de M. P. M. demuestra la ineficacia de los recursos internos porque, aunque un tribunal interno ordenó el regreso de M. P. M., no se hizo efectivo.

5.6 La autora precisa que no fue convocada a asistir a las audiencias que condujeron a la última orden, dictada el 26 de noviembre de 2021. El hecho de que no pudiera exponer sus argumentos en un procedimiento contencioso, con arreglo al sistema de justicia juvenil, constituye una denegación de justicia.

5.7 En respuesta al argumento del Estado parte de que las reclamaciones deben plantearse en cuanto al fondo en un procedimiento interno, la autora afirma que el 4 de enero de 2021 presentó una denuncia ante el Tribunal de Menores y el Tribunal de Apelación de Rennes.

Comentarios sobre el fondo

5.8 La autora reitera que las órdenes de internamiento no se ajustan a los artículos 9 y 42 de la Convención, ya que no tienen en cuenta el interés superior de las niñas, y que los jueces nacionales desconocen las exigencias que impone la Convención a los Estados partes.

5.9 En respuesta a la afirmación del Estado parte de que las alegaciones de agresión sexual formuladas por la autora no estaban respaldadas por pruebas, la autora reitera que las alegaciones fueron confirmadas por la sentencia de 31 de marzo de 2021. Asimismo, el Estado parte considera que la alegación de prostitución carece de fundamento. La autora sostiene que ha aportado el acta redactada por un auxiliar judicial de la conversación entre la autora y la presidenta de una asociación de lucha contra la explotación sexual de niños en el contexto de la prostitución, quien corrobora sus afirmaciones. Al no proteger a las niñas de la explotación y los abusos sexuales, el Estado parte ha vulnerado los artículos 19 y 34 de la Convención. La autora afirma también que el Estado parte faltó a la verdad en las observaciones que presentó al Comité, lo que constituye una violación de los artículos 44, 45 y 46 de la Convención.

5.10 La autora señala que, en virtud de la sentencia de 31 de marzo de 2021, que corroboró las alegaciones de agresión sexual de J. P. M., carece de fundamento que el Estado parte

utilice su condena penal por difamación, lo que supone una vulneración del artículo 2, párrafo 2 de la Convención.

5.11 La autora señala que, dado que las autoridades denegaron a M. P. M. una atención médica continuada, no dispuso de las plantillas ortopédicas que necesitaba para corregir la desviación de la columna vertebral. Esto demuestra que, a pesar de las numerosas quejas de su madre, M. P. M. no recibió una atención adecuada mientras estuvo internada, lo cual constituye una violación de los artículos 6 y 24 de la Convención. La autora señala que el psiquiatra designado por el tribunal certificó que la madre era apta para cuidar de sus hijas. Sin embargo, el juez desestimó este dictamen pericial en favor de otro que afirmaba lo contrario. Este acto supone otra vulneración del artículo 24 de la Convención.

5.12 La autora afirma que pidió insistentemente a la Ayuda Social a la Infancia que velara por que sus hijas recibieran la atención médica necesaria y señala que el hecho de que no se respetara su patria potestad sobre las decisiones médicas relativas al cuidado de M. P. M. constituye una violación del artículo 25 de la Convención. El 18 de noviembre de 2021, M. P. M. consultó a un médico porque tenía llagas en el pie; estaba previsto operarla el 20 de diciembre de 2021. La Ayuda Social a la Infancia no informó a la autora de la situación médica de su hija ni solicitó su autorización para operarla. De hecho, el 26 de noviembre de 2021, el tribunal de Rennes otorgó a la Ayuda Social a la Infancia la facultad de autorizar la operación sin celebrar un procedimiento contencioso. La autora considera que la medida muestra un desprecio inaceptable de su patria potestad. Asimismo, la autora se puso en contacto con la Ayuda Social a la Infancia en numerosas ocasiones acerca de la escoliosis de M. P. M., que ahora requiere una cirugía mayor de espalda.

5.13 Aunque el Tribunal Correccional de Saint-Brieuc reconoció la agresión sexual a J. P. M., la autora señala que no se le proporcionó ninguna atención, pese a haber cursado numerosas solicitudes. En respuesta a la afirmación del Estado parte de que la autora se opone a las vacunas, ella indica que fueron denegadas arbitrariamente todas sus solicitudes de diagnóstico independiente del autismo de J. P. M. Además, M. P. M. sufrió durante varios meses de un uñero infectado por falta de cuidados. Tras perder la confianza en las instituciones médicas, la autora se muestra reacia a vacunarse. Considera que el Estado parte infringe el artículo 24, párrafo 1 y el artículo 25 de la Convención al no proporcionar a sus hijas la atención médica solicitada.

5.14 En sus comentarios adicionales de 1 de junio de 2022, la autora reitera que en los comentarios presentados el 22 de diciembre de 2021, subrayó que el Estado parte se basaba en el número de procedimientos judiciales y en que la autora no había dejado de denunciar las deficiencias del sistema de protección de la infancia, que supuestamente se encargaba de proteger a los niños. La autora sostiene además, y mantiene, que se han vulnerado los artículos 3, 6, 9, 19, 24, párrafos 1 y 3, 25, 34, 35, 36, 41 y 44, párrafo 6, de la Convención, y que las violaciones adicionales se basan en las observaciones del Estado parte.

5.15 La autora observa que los informes enviados al Comité por el Estado parte para justificar el internamiento de M. P. M. y J. P. M. no son los mismos que se pusieron en conocimiento de la autora durante el procedimiento interno. En esos informes se acusa a la autora de haber amenazado de muerte a su madre y a sus hijas antes de suicidarse. En cambio, el dictamen pericial que encargó el propio tribunal certificó que la autora no padecía ninguna patología, que era apta para criar a sus hijas y que su comportamiento no era depresivo ni suicida. La autora cree que este dictamen pericial se ocultó deliberadamente. Además, la autora no tuvo conocimiento de las acusaciones formuladas contra ella en el informe hasta mayo de 2022, por lo que no tuvo oportunidad de defenderse. Como consecuencia, los tribunales nacionales no examinaron adecuadamente las pruebas, e infringieron el artículo 4 de la Convención.

5.16 En conclusión, la autora pide al Comité que declare inadmisibles los documentos presentados por el Estado parte en los que se formulen “falsas acusaciones” contra la autora, ya que el Estado parte nunca formuló esas acusaciones “en cuanto al fondo” durante el procedimiento interno. Además, la autora pide al Comité que constate que se han vulnerado los artículos 2, párrafo 2, 3, 4, 6, 9, 19, 24, párrafos 1 y 3, 25, 34, 35, 36, 41 y 44, párrafo 6, de la Convención.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 20 de su reglamento en relación con el Protocolo Facultativo, si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

6.2 El Comité recuerda que, con arreglo al artículo 5, párrafo 2 del Protocolo Facultativo, cuando se presente una comunicación en nombre de niños, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento. Por lo tanto, es responsabilidad de los autores proporcionar esta justificación, incluso en los casos en que el autor sea el padre o la madre.

6.3 En el presente caso, el Comité observa que en el momento en que se presentó la comunicación, en diciembre de 2020, J. P. M. y M. P. M. tenían 12 y 11 años respectivamente, y deberían estar en condiciones de dar su consentimiento informado a que la autora presentara una comunicación al Comité en su nombre. El Comité señala asimismo que, mediante la decisión de 17 de junio de 2020, el juez de menores de Rennes ordenó mantener en secreto el domicilio de las niñas, al tiempo que concedió a la autora el derecho a visitas supervisadas organizadas por el centro. El Tribunal de Apelación de Rennes mantuvo el derecho a las visitas supervisadas el 13 de agosto de 2020. Dado que no se había suspendido el contacto de la autora con J. P. M. y M. P. M., le correspondía a ella explicar el motivo por el que no había podido obtener su consentimiento. En consecuencia, el Comité considera que la autora no ha justificado que actuara en nombre de sus hijas, por lo que estima que no puede examinar la comunicación con arreglo al artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo.

6.4 En consecuencia, el Comité declara la comunicación inadmisibile con arreglo al artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo porque la autora no ha justificado que actuara en nombre de sus hijas sin su consentimiento.

7. Por consiguiente, el Comité decide:

a) Que la comunicación es inadmisibile en virtud del artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo;

b) Que la presente decisión se ponga en conocimiento de la autora de la comunicación, de J. P. M. y M. P. M y del Estado parte para su información.
